--- **RESOLUCIÓN: 471 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO).**---

--- Ciudad Victoria, Tamaulipas, a (13) trece de diciembre de (2018) dos mil dieciocho.-----

--- **V I S T O** para resolver el presente **Toca 496/2018**, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, dentro del **expediente 235/2016**, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el ***** en contra de *****; visto el escrito de expresión de agravios, la sentencia impugnada, con cuanto más consta en autos y debió verse; y,-----

----- **R E S U L T A N D O.**-----

--- **PRIMERO.**- La sentencia impugnada concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

“--- **PRIMERO.**- La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, y la parte demandada no compareció a juicio; en consecuencia,--- **SEGUNDO.**- Se declara **PROCEDENTE** el presente Juicio Especial Hipotecario, promovido por la Licenciada ***** en su carácter de Apoderada Legal del ***** , en contra de ***** --- **TERCERO.**- En virtud de lo anterior, se da por **RESCINDIDO** el **CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA** y por ende vencido anticipadamente el plazo para su pago, condenando al demandado ***** al pago de la cantidad de **\$268,055.28 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)**, equivalente a 120.7230 veces el Salario Mínimo Mensual por concepto de suerte principal al día treinta y uno del mes de diciembre del año dos mil quince.--- **CUARTO.**- Se le condena a la demandada ***** al pago de **intereses ordinarios** devengados, así como al pago de intereses moratorios vencidos y que se sigan venciendo

hasta el pago total del adeudo, cuya liquidación se reserva en la vía incidental.--- **QUINTO.-** Se le condena al pago de las actualizaciones de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en juicio derivadas del incremento al salario mínimo. Y se le condena al pago de daños y perjuicios, sin embargo su cuantificación se reserva en ejecución de sentencia.--- **SEXTO.-** Se le condena a la parte demandada, al pago de los gastos y costas originados por la tramitación del presente juicio, en virtud de que la presente sentencia le fue adversa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado.--- **SÉPTIMO.-** No ha lugar a condenar al demandado al pago de las **Primas de Seguros**, toda vez que no se encuentra acreditado en autos que la parte actora en representación o por orden del demandado hubiere cubierto a una institución de esta naturaleza algún seguro.--- **OCTAVO.-** En consecuencia se ordena rematar en su oportunidad en pública almoneda el Bien inmueble el cual se ubica en: **DEPARTAMENTO NÚMERO ***, **DEL EDIFICIO ****, **EN LA CALLE *******, ******, **Y CONSTA DE SALA, COMEDOR, COCINA, BAÑO, ALCOBA, DOS RECAMARAS Y PATIO DE SERVICIO, CON SUPERFICIE DE **** METROS CUADRADOS, Y UN INDIVISO DE *******, **CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: EN ***** CON *******. **AL SUR: EN ***** CON ******* **AL ESTE: EN ***** CON ***** Y ***** CON ******* **AL OESTE: EN ***** CON ******* **ARRIBA: CON ******* **ABAJO: CON *******.- **Inmueble que se adquirió por la parte demandada el C. **** *******, mediante **ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO *******, **VOLUMEN *******, ANTE LA FE PUBLICA DEL LICENCIADO ***** , NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ***, CON EJERCICIO EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE TAMAULIPAS, DE FECHA ***** , la cual se inscribió en el Registro Publico de la Propiedad en la SECCIÓN ***** , NÚMERO **** , LEGAJO ***, DE ***** , TAMAULIPAS DE FECHA ***** .--- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-** Así lo resolvió y firma...”-----

--- **SEGUNDO.-** Notificada la sentencia anterior a las partes, e inconforme la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido en efecto devolutivo mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho ordenándose la remisión de los autos originales al Supremo Tribunal de Justicia del Estado

para la sustanciación; lo que se hizo por oficio 837 de dieciséis de noviembre del presente año. Llegados los autos a este Tribunal, previo el sorteo correspondiente, fueron turnados a ésta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar con el oficio 6374 del veintisiete de noviembre del año en curso, radicándose el presente toca el día veintiocho del referido mes y año, cuando se tuvo a la parte apelante expresando en tiempo y forma los agravios que estima le causa la resolución impugnada mediante su escrito recibido el dieciséis de octubre del actual.-----

--- Se comunicó a las partes la actual integración de la Sala.- Así, quedaron los autos en estado de fallarse; y,-----

----- **CONSIDERANDO** : -----

--- **PRIMERO.**- Esta Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, es competente para resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado, en relación con el Acuerdo General, puntos cuarto, inciso b, y séptimo, del Pleno de este Tribunal, del tres de junio de dos mil ocho, que entró en vigor a partir del cinco del propio mes y año, a que se refiere la circular 6/2008.-----

--- **SEGUNDO.**- El demandado ***** , expresó en concepto de agravios lo siguiente:

La resolución dictada en primer grado vulnera en mi perjuicio los extremos de los artículos 112 Fracción III y IV, 113, 114 del Código de Procedimientos Civiles, así como diversos criterios jurisprudenciales que más adelante se precisarán, pues los puntos resolutivos en relación con los considerando Segundo, Tercero y cuarto son violatorios de los numerales antes invocados en virtud de lo siguiente:

El considerando quinto a la letra dice: (lo transcribe).

PRIMER AGRAVIO.- Los puntos resolutivos en relación con el considerando QUINTO de la sentencia que ahora se impugna me causa serios perjuicios en virtud de que contraviene lo dispuesto por el artículo

112 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado, en atención a que como se puede apreciar la parte actora al entablar la acción lo hace en contra del suscrito, tal y como se puede apreciar en el escrito inicial de demanda en donde me reclama entre otras cosas lo siguiente. A) El vencimiento anticipado del CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO CON CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA y del plazo que mi mandante otorgó al ahora demandado para cumplir con la obligación contraída en que ha incurrido en el incumplimiento de pago de las amortizaciones al crédito concedido y formalizado con dicho contrato, tal y como se encuentra previsto en la cláusula octava de dicho contrato, mismo que va inserto en el documento base de mi acción y que aquí adjunto como anexo 02, B) pago del equivalente a 104.0000 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en lo sucesivo "VSMM", que a la fecha de presentación de la demanda equivale a la cantidad de **\$228,186.64 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO (sic) PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.)** POR CONCEPTO DE CAPITAL O SUERTE PRINCIPAL, MISMA QUE SE DESPRENDE DE LA CERTIFICACIÓN DE ADEUDO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2016, MISMA QUE SE AGREGA A LA PRESENTE COMO ANEXO 03 ... C).- El pago de los intereses ordinarios generados y que se sigan generando... C El pago de los intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúe generando hasta la total liquidación del adeudo... D).- pago de los intereses moratorios no cubiertos, más los que se continúen generando hasta la total liquidación del adeudo... E).- El pago de las primas de seguro que se pactó en las cláusulas SEXTA Y SÉPTIMA... F).- El pago de la cantidad que en ejecución de sentencia y con el auxilio de lo peritos sea fijado por concepto de daños y perjuicios... G).- El pago de las actualizaciones de todas y cada de las prestaciones que pretendo hacer valer... H).- El gastos y costas del juicio.- De igual forma en el texto de la demanda específicamente en el punto número I de hechos de la misma se establece que: "Con fecha *****", la parte demandada ***** , celebró con mi representada el ***** , un contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía hipotecaria respecto del inmueble... Así pues con dicho contrato se otorgó al demandado el crédito ***** por la suma equivalente en ese entonces 104.0000 veces el salario mínimo mensual del Distrito Federal, lo que se aprecia en la CLÁUSULA PRIMERA del contrato materia de mi acción. De lo anterior..."

Como se puede apreciar en los considerandos de referencia ya antes transcritos se palpa la seria contradicción ya que se tiene que analizar jurídicamente hablando sobre la procedencia o improcedencia de **LAS ACCIONES**, con vista de las pruebas aportadas o del derecho alegado si el

punto a discusión no amerita prueba material, de lo que deviene que la sentencia emitida por el Juez de Primer Grado no se encuentra debidamente motivada, ya que si bien es cierto que esta se funda, también es cierto que no fue debidamente motivada la misma, ya que como se puede apreciar en los puntos resolutiveos en relación con los considerandos tercero y cuarto de la misma, no existe un verdadero, real y auténtico análisis jurídico sobre la procedencia de la acción ejercitada en mi contra, ya que, como ha quedado debidamente demostrado las prestaciones que se me reclaman se encuentran debidamente asentadas en el escrito inicial de demanda y a las cuales ya me referí con anterioridad, sin embargo, al momento de darle lectura a la demanda en donde desde luego se debe de destacar las prestaciones que se me reclaman, ello desde luego con base en los documentos fundatorios de la acción, nos debemos de dar cuenta que existe un error o bien una prestación totalmente desfasada con la realidad o bien con base en los documentos fundatorios de la acción, esto es con el contrato de fecha 17 de junio del año de 1999, esto es que mientras en el contrato se estableció que el crédito que se le otorgó al suscrito fue por 104.0000 veces el salario mínimos vigente en el Distrito Federal, (ESTO ES EN EL CONTRATO BASE DE LA ACCIÓN), es decir, en el documento que da origen a la relación contractual entre la hoy actora y el suscrito, el origen mismo de la deuda principal, el crédito otorgado al suscrito por determinada cantidad de dinero, establecida en salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, por ende es por dicha cantidad por la cual se me debe de reclamar por concepto de suerte principal.

No obstante lo anterior al momento de emitir la resolución que ahora se impugna por medio del recurso de apelación que nos ocupa, el Juez de primera Instancia al momento de resolver omite hacer una relación jurídica, sobre la acción ejercitada en mi contra, remitiéndose sólo al hecho de declarar procedente la acción ejercitada en mi contra.

Efectivamente el Juez Resolutor de primer grado le otorga valor probatorio pleno a la documental consistente en el contrato de referencial es decir le da valor probatorio pleno a dicho contrato al hacer el análisis respectivo en el considerando segundo de dicha sentencia, es decir, le da valor probatorio pleno al contrato celebrado entre la hoy actora y el suscrito el cual fue por la suma de 104.0000 veces el salario mínimo vigente en el distrito federal, pero tal es el caso que al entrar al análisis de la acción, en ningún momento analiza dicha cuestión, es decir, primero **DETERMINA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, y manifiesta que acredita la celebración de dicho contrato, pero obsérvese que en ningún momento le otorga valor probatorio alguno**, ésto se puede corroborar al darle lectura íntegra al considerando cuarto de la resolución que ahora se impugna darle valor probatorio pleno pero al momento de emitir la resolución respectiva decide

condenar al suscrito por una cantidad mucho muy superior a la celebrada en dicho contrato esto es a la **cantidad de \$268,055.28 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) equivalente a 120.7230 VSM (veces salario mínimo del D.F.)**, de lo que deviene que no se realizó una debida fundamentación y motivación al momento de emitir la sentencia definitiva de primera instancia, ya que no es posible que se funde la acción en un contrato celebrado por determinada cantidad de dinero y posteriormente se me condene a una cantidad superior, y ésta sea procedente, ya que me deja en completo estado de indefensión para hacer valer mis derechos, ya que si a la parte actora se le antoja reclamarme 2000 o 50000 veces el salario mínimo vigente en el distrito federal, ¿se declararía procedente dicha acción?, resulta absurdo, aberrante y contrario a derecho, es por ello que la resolución que ahora se impugna deberá de revocarse la misma y declarar la improcedencia de la prestación que se me reclama en dicho inciso.

En íntima relación a lo anterior el juez Resolutor omite un análisis correcto de la acción ejercitada en mi contra, ya que como se desprende el actor en su demanda reclama por concepto de suerte principal lo siguiente: El pago del equivalente a 104.0000 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en lo sucesivo "VSMM", que a la fecha de presentación de la demanda equivale a la cantidad de **\$228,186.64 (DOSCIENTOS (sic) VEINTIOCHO PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.)**, que cuando existe un error en las cantidades que se detallan en una acción debe de prevalecer la cantidad estampada con letra pero es el caso que el juez de primer grado en ningún momento tomo en cuenta esta circunstancia, ni mucho menos hizo un análisis al respecto, si no por el contrario de forma categórica condena a una cantidad que no fue reclamada por el demandado y que como ya se dijo con antelación es una cantidad superior a la que la actora reclamo, errores que se pueden palpar con meridiana claridad en la resolución que ahora se impugna mediante el recurso que nos ocupa ya que al momento de emitir el resultando único el Juez erróneamente dice: "...B).- El pago del equivalente a 104.0000 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en lo sucesivo "VSMM", que a la fecha de presentación de la demanda equivale a la cantidad de **\$228,186.64 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO (sic) PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.)**, por concepto de **capital o suerte principal...**", es decir el Juez de Primera Instancia va supliendo la deficiencia de la queja en beneficio de la actora, de lo que de antemano sabemos que jurídicamente hablando ello no es posible, omitiendo otorgarle valor probatorio alguno al contrato fundatorio de la acción ya que fue omiso al respecto y al no haberlo hecho ello trae como consecuencia

que en ningún momento se le otorgó valor probatorio alguno entre la actora y el suscrito.

Continuando con este orden de ideas de forma fehaciente que el Juez de primera instancia continúa incurriendo en una serie de anomalías, incongruencias y falta de análisis jurídico de la acción planteada por la parte actora, ya que de la transcripción de considerando quinto se desprende que el crédito que se le otorgó al suscrito LO FUE POR EL EQUIVALENTE A 104 VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL ATENDIENDO AL VALOR DEL SALARIO MÍNIMO EN LA ÉPOCA DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE MÉRITO, es decir, el A Quo continua incurriendo en irregularidad e incongruencias ya que como se dijo que en varias ocasiones con antelación la actora reclama 104.0000 veces el salario mínimo, cuyo equivalente también se reclamó en forma errónea pero en el caso concreto el juez me condena conforme al considerando QUINTO 104 veces salario mínimo cuyo equivalente indudablemente es una cantidad muy distinta a la que reclama y mucho más a la que se me condena de ahí la falta de motivación y a la violación de principio de incongruencia.

Pero independientemente de lo anterior la irregularidades cometidas por el tribunal de primer grado no solo quedaron ahí conllevando al Juez de primera instancia a que cometa más irregularidades al respecto ya que como se puede apreciar en la demanda específicamente en el inciso B que se refiere al capítulo de prestaciones reclamadas la actora presenta una tabla en la que se determina la forma en que se van a calcular los días salario mínimo, sacando como deducción se tiene que multiplicar la cantidad 73.04 que es el salario mínimo vigente al día 01 de abril del año 2016, por 30.4 días que es el promedio que se saca anual conforme lo manifiesta el propio actor y este a su vez se multiplica por 104.0000 que es el adeudo en veces el salario mínimo mensual del DF, lo cual trae como resultado la suma de \$228,188.64, pero es el caso que como se ha venido mencionando no existe un análisis o motivación de parte de Juez al momento de dictar la sentencia que ahora se impugna, ya que si hacemos una multiplicación en la forma en que lo plante al propio actor nos damos cuenta de que existe un resultado totalmente diferente al que enuncia el actor, que es precisamente la cantidad de \$230,923.264, de lo que deviene efectivamente el Juez en ningún momento hizo un análisis de la procedencia de las acciones reclamadas o bien en la forma en que se estaban reclamando, es decir, debió de cerciorarse fundando y motivando su resolución conforme a los principios de motivación y de congruencia que toda Sentencia debe de reunir de lo que conlleva a que la misma deberá de ser revocada conforme a los razonamientos esgrimidos con antelación.

Sirve de apoyo a lo anterior los criterios jurisprudenciales que a continuación me permito transcribir:

“SENTENCIAS, MOTIVACIÓN DE LAS.” (La transcribe).

SEGUNDO AGRAVIO.- Que se hace consistir en la violación del numeral 113, de la Ley Adjetiva Civil en vigor en el estado, el cual claramente establece en su primera parte: **“Las sentencias deberán de ser congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito...”**, efectivamente en íntima relación con el agravio anterior se vulnera en mi perjuicio los extremos del numeral anterior según se desprende de la lectura de los considerandos ya transcritos, ya que de lectura de los puntos resolutive en relación con los considerandos tercero, cuarto y quinto antes citados se desprende que la sentencia definitiva no es congruente, es decir lo demandado por la actora lo cual está basado con el documento base de la acción, no concuerda con las prestaciones reclamadas y al emitir prestaciones que no se encuentran debidamente fundadas y motivadas conforme al documento que se acompaña como fundatorio de la acción existe incongruencia si se condena a la demandada al pago o prestación de algo a lo que en ningún momento se obligó, y ante ello es indiscutible que no existe congruencia en dicha sentencia.

Al pronunciarse la sentencia, se estudiarán plenamente las acciones reclamadas por la actora debiendo fundarlas y motivarlas es decir hacer un análisis jurídico de las mismas que no es otra cosa que la motivación de la Sentencia, y si las acciones se declaran improcedentes, se abstendrán los tribunales de entrar al fondo del negocio, dejando a salvo los derechos del actor. Si dichas excepciones no se declaran procedentes, se decidirá sobre el fondo del negocio, **CONDENANDO O ABSOLVIENDO, EN TODO O EN PARTE**, según el resultado de la valuación de las pruebas que haga el juzgador.

Una vez analizado el considerando quinto en cita se deduce claramente que el Juzgador de primer grado en forma por demás clara violenta en perjuicio del suscrito el principio de **"CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIA"**, ya que de la simple lectura de lo demandado por el accionante en su carácter de Apoderado legal de la persona moral denominada ***** ,
 ahora bien, al momento de la celebración del contrato fundatorio de la acción esto es el contrato de fecha ***** , entre el ***** y el suscrito ***** , mediante el cual se le otorgó un crédito para la adquisición de una vivienda, cuyas características, monto del crédito, prestaciones reclamadas, han quedado precisadas en el agravio que antecede y las cuales solicito se me tengan por reproducidas en este

apartado como si se insertaren a la letra por cuestiones de economía procesal, de las cuales se desprende que existe una falta de motivación al momento de emitir la resolución que ahora se impugna mediante el presente recurso de apelación, pero además también se desprende de la lectura de la misma que no existe congruencia entre lo solicitado por el apoderado de la demandante, es decir, en primer término demanda entre otras prestaciones como surte principal la suma de "...B).- El pago del equivalente a 104.0000 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en lo sucesivo "VSMM", que a la fecha de presentación de la demanda equivale a la cantidad de **\$228,186.64 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO (sic) PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.), por concepto de capital o suerte principal...** y posteriormente el juez me condena al pago de la cantidad de **\$268,055.28 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.) equivalente a 120.7230 VSM (veces salario mínimo del D.F.)**, es decir, erróneamente desde el momento en que se presenta la demanda, existe una clara y seria contradicción, ya que el Juez al momento de aceptar o radicar el juicio debió de haber ordenado subsanar la irregularidad, más no obstante ello no lo hizo, sin embargo, es obligación del Juzgador hacer un análisis jurídico de las prestaciones reclamadas, y con base en ello emitir una resolución totalmente apegada al principio de congruencia de toda sentencia, pero es el caso que los puntos resolutivos y los considerandos en cita no son congruentes entre lo solicitado por el apoderado de la actora, lo cual se debe de fundar, motivar previo análisis con base en lo pretendido por el actor lo cual deberá de analizarse con base en los documentos fundatorios de la acción, ya que si bien es cierto que el actor puede solicitar el cielo y las estrellas, ello no indica o presupone que se los vayan a conceder y en el caso concreto, la parte demandante, reclama por concepto de suerte principal **\$228,186.64 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO (sic) PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS /100 M.N.), por concepto de capital o suerte principal...**, es decir, reclama una cantidad muy diferente a la cual me obligué, y si bien es cierto que se pueden reclamar las prestaciones que uno decida en su demanda, también es cierto que dichas prestaciones deben de reclamarse, con apego total al documento que se exhiba como fundatorio de la acción, y como ha quedado debidamente demostrado, no concuerda con el exhibido y agregado en autos, ya que suponiendo sin conceder que en lugar de la cantidad que me reclama la actora me hubiere reclamado treinta mil o cuarenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el Juez de Primera Instancia me hubiere condenado a dicha cantidad?, sólo por el hecho de que a la actora se le ocurrió reclamarme dicha suma, luego entonces resulta aberrante, fuera de círculo legal, totalmente contrario a

derecho, no escapando a la vista del suscrito que en ninguna parte del contrato se desprende que la cantidad del crédito concedido se pueda aumentar o disminuir al libre arbitrio de la actora, ya que sólo existe la estipulación en el contrato que la actora traducirá a salario mínimo mensual vigente a la fecha de la realización del pago, pero en ninguna parte, se insiste se desprende que se pueda elevar los salarios mínimos al libre antojo de la actora, por lo tanto ante la situación anterior con la sentencia emitida se violenta en perjuicio del suscrito el principio de congruencia, regulado por el numeral que se invoca y que es violatorio de mis derechos por ende deberá de declararse procedente el agravio que nos ocupa.

Incongruencia que se encuentra bien determinada conforme a todos los razonamientos esgrimidos en el considerando anterior los cuales solicito se me tengan por reproducidos a la letra por cuestiones de economía procesal.

Sirven de apoyo a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el este apartado los criterios jurisprudenciales que a continuación me permito transcribir:

“CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE PRINCIPIO.”, “CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS, PRINCIPIO DE.”, “CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE.”, “CONGRUENCIA, CONCEPTO DE.”, “CONGRUENCIA. PRINCIPIO DE, EN LA SENTENCIA.”, “RESOLUCIONES JUDICIALES, CONGRUENCIA DE LAS.”, “SENTENCIA, LA FALTA DE CONGRUENCIA EN ELLA, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.”, “SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS.”, “SENTENCIA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.”, “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).”, “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS.”, “SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS.” y “SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.” (Las transcribe).”

--- **TERCERO.-** Los agravios que preceden son esencialmente fundados.-----

--- Le asiste la razón al demandado en aquella parte de los agravios donde se duele, en lo medular, de infracción a los artículos 112, fracción IV, 113 y 114 del Código de procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, porque la sentencia impugnada carece de un verdadero análisis jurídico sobre la procedencia de la acción, con vista a las pruebas aportadas, como lo son el contrato base y el

certificado de adeudos; además, incumple el requisito formal de congruencia que debe reunir toda sentencia judicial, porque concede al actor más de lo solicitado.-----

--- La conclusión es en tal sentido, porque como lo hace ver el apelante, el instituto actor reclamó entre otras prestaciones, el pago de 104.0000 (ciento cuatro punto cero cero cero cero) veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, que estimó equivalente a la fecha de presentación de la demanda en la cantidad de \$228,188.64 (doscientos veintiocho mil ciento ochenta y ocho pesos 64/100 m.n.) por concepto de capital o surte principal.-----

--- Sin embargo, el Juez condenó al demandado al pago de \$268,055.28 (doscientos sesenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos 28/100 m.n.) equivalente a 120.7230 (ciento veinte punto siete mil doscientos treinta) veces el salario mínimo mensual; cantidad superior a la reclamada por el actor y que no encuentra sustento en el contrato de crédito con garantía hipotecaria de ***** , el cual establece que el crédito otorgado al demandado fue por 104.0000 (ciento cuatro punto cero cero cero cero) veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal.-----

--- De ahí lo fundado de los agravios hechos valer, pues de lo dispuesto por los numerales 112, fracción IV, 113 y 114 del ordenamiento adjetivo invocado, se advierte en lo que interesa al presente estudio, que las sentencias el análisis jurídico de la procedencia o improcedencia de las acciones y excepciones con vista de las pruebas aportadas o del derecho alegado si el punto a discusión no amerita prueba material; que deberán ser congruentes con la demanda, constatación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pelito, y resolver todos los puntos que hayan

sido objeto del debate y que ellas no podrá concederse a una parte lo que no haya pedido.-----

--- En ese sentido, lo que se impone es concluir que la sentencia apelada agravia al demandado, porque carece de un verdadero análisis jurídico sobre la procedencia de la acción, con vista a las pruebas aportadas; además, incumple el requisito formal de congruencia, porque concede al actor más de lo solicitado.-----

--- Por tanto, en reparación de los agravios causados al demandado inconforme, ante la inexistencia del reenvío en el sistema que rige la apelación, lo que procede es revocar la sentencia impugnada y resolver la controversia con plenitud de jurisdicción; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 949, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas y la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de nuestro más alto Tribunal de Justicia, consultable en la página 46, Tomo IV, Apéndice 1917-200, Sexta Época, tesis 58, que dice:

“APELACIÓN, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.- En el sistema procesal en que no existe reenvío, el tribunal de apelación debe examinar y resolver con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar que el inferior las subsane, porque debe corregirlas por sí mismo.”

--- Del expediente de primera instancia se advierte que el ***** por conducto de su apoderada ***** y continuado por ***** , con el mismo carácter, promovió juicio hipotecario en contra de ***** , de quien reclamó: El vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía hipotecaria celebrado por las partes; el pago del equivalente a 104.0000 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal (actualmente

Ciudad de México) la cual estimó equivalente a la fecha de presentación de la demanda a la cantidad de \$228,188.64 (doscientos veintiocho mil ciento ochenta y ocho pesos 64/100 m.n.), por concepto de capital; el pago de intereses ordinarios generados y que se sigan generando hasta la solución del juicio, sobre saldos insolutos de acuerdo a lo pactado en la cláusula primera del contrato base, cuantificables en ejecución de sentencia; el pago de intereses moratorios no cubiertos más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, conforme a lo pactado en la cláusula tercera, estipulación III, del contrato, determinables en ejecución de sentencia; el pago las primas de seguro que se pactó en las cláusulas sexta y séptima del contrato base; el pago de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia y con el auxilio de peritos, por concepto de daños y perjuicios ocasionados a la actora, derivado del incumplimiento del demandado, integrados de la siguiente manera: por concepto de daños, una cantidad equivalente a la renta mensual desde el otorgamiento del crédito ***** , hasta que reciba el pago, por el uso del inmueble y por concepto de perjuicios, los intereses legales que produzcan de rentas no pagadas por el demandado; el pago de las actualizaciones de todas y cada una de las prestaciones hechas valer; el pago de los gastos y costas del juicio. (Fojas 1-7 del expediente de primera instancia).-----

--- El demandado por su parte no produjo contestación, no obstante que fue legalmente emplazado en el recinto del juzgado de origen. Por lo que se le declaró la rebeldía teniéndole por admitidas salvo prueba en contrario los hechos de la demanda que dejó de contestar. (Fojas 92 y 100 del principal).-----

--- Los artículos 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas establecen:

“**ARTÍCULO 530.-** Se tramitarán en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca.”

“**ARTÍCULO 531.-** Para que proceda el juicio hipotecario, deberán reunirse los siguientes requisitos:

I.- Que el crédito conste en escritura pública la cual deberá estar debidamente registrada; y,

II.- Que sea de plazo cumplido; o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley.”

--- El primer elemento de la acción se satisface con la copia certificada expedida por el Director de la Oficina del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tampico, Tamaulipas, del primer testimonio de la escritura pública Volumen ***** , escritura número ***** , de ***** , de la Notaría Pública ***** , con ejercicio en esta ciudad, visible a fojas 24-25; documento que tiene valor probatorio pleno atentos a lo previsto por los artículos 325 y 397 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con el cual se acredita la existencia del contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria celebrado por los contendientes, el cual consta en escritura pública debidamente registrada.-----

--- El segundo elemento se actualiza, ante el incumplimiento del demandado respecto de pago de las amortizaciones señaladas por el instituto actor en el hecho nueve del escrito inicial, lo cual se le tuvo por admitido, salvo prueba en contrario, por no haber producido contestación a la demanda, amén de que el demandado tampoco demostró el pago de esas amortizaciones; por lo que se acredita la causa de vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito

pactado en la clausula octava, inciso, 1, consistente en la falta de dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el curso de un año.----

--- Sin embargo, como el instituto demandante solicitó por concepto de suerte principal el pago de una precisa cantidad de veces el salario mínimo mensual vigente para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, tanto así que citó en su escrito inicial la cantidad líquida que representaba en pesos a la fecha de presentación de la demanda; no cabe duda que estaba procesalmente obligada a aportar las pruebas tendentes a demostrar que el demandado adeuda la cantidad que se le reclama, no como un elemento de la acción hipotecaria, sino por ser el objeto de la pretensión deducida en el juicio, pues el efecto jurídico perseguido con el ejercicio de la acción es obtener una sentencia favorable en la que se condene al demandado al pago de una cantidad líquida específicamente reclamada.-----

--- Por tanto, al constituir un punto de la litis el pago de la cantidad líquida reclamada, el actor debe acreditar en primer lugar, el derecho en que descansa su pretensión, y en segundo término, aquéllas de las que se aprecie la manera en que ese derecho se traduce de manera líquida a las veces de salario mínimo mensual o dinero que reclama, pues en ese supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que proceda la condena respectiva, sino a su vez es menester que compruebe que le asiste el derecho para exigir una cantidad determinada de dinero, porque esos aspectos relevantes no pueden determinarse en ejecución de sentencia, ya que además de que la prestación de mérito es objeto principal del juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permite que el actor principal tenga una nueva oportunidad para

acreditar la manera en que su derecho se traduce en un monto líquido en dinero.-----

--- Sirve de respaldo la jurisprudencia II.12°. CJ/2 del Duodécimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1709 Tomo XXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el disco óptico IUS 2011 con número de registro 177542, con el rubro y texto:

“PRESTACIONES DEMANDADAS EN FORMA ESPECÍFICA Y EN CANTIDAD LÍQUIDA. NO ES VÁLIDO APLAZAR SU CUANTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Cuando el actor reclama en forma específica y en cantidad líquida el pago de diversas prestaciones, es incorrecto que la ad quem o, en su caso, el a quo, dejen la cuantificación de éstas, para la ejecución de sentencia, pues deben analizar si quedaron acreditadas con las pruebas ofrecidas en el juicio, ya que de lo contrario, se daría una nueva oportunidad a la parte actora de probar su acreditamiento en contravención a los principios de equilibrio procesal, de preclusión e igualdad entre las partes que debe existir en todo proceso.”

--- Asimismo aplica la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo su anterior estructura, correspondiente a la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 151-156, Cuarta Parte, página 111, y consultable además en el disco óptico IUS 2011 con el número de registro 240618, de rubro y texto:

“DAÑOS Y PERJUICIOS, FALTA DE COMPROBACIÓN DEL PRECIO CIERTO Y DETERMINADO DE LOS. Cuando en el juicio natural se ejercita una acción específica de daños y perjuicios, es decir, con señalamiento preciso del monto de lo reclamado, si en autos no queda debidamente comprobado el precio cierto y determinado de los daños y perjuicios, debe absolverse a los demandados, porque no siendo posible la condena por la falta de comprobación, no es dable remediar tal omisión, por no estar permitido legalmente un doble término de prueba. Esto es así, porque el señalamiento aludido obviamente incorpora dicho monto a la materia de las pretensiones deducidas, cuyos elementos debe

precisamente demostrar la parte actora durante el juicio y no con posterioridad, porque esto implicaría, con violación de los principios procesales de preclusión y de trato igual a las partes, conceder al actor un doble periodo de prueba. Esto no sucede cuando la demanda de daños y perjuicios es genérica, esto es, cuando en ella no se precisa el monto de lo reclamado; caso en el cual, naturalmente, dicho monto no forma parte de la litis y, por tanto, no arroja sobre el actor, en cuanto a dicho monto, la carga de la prueba, según se estima en tesis de jurisprudencia número 139 de esta Tercera Sala, publicada en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DAÑOS Y PERJUICIOS. CONDENA GENÉRICA. Los artículos 85, 515 y 516 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, y los códigos procesales de los Estados de la República que tienen iguales disposiciones, permiten concluir que si el actor en un juicio que tiene por objeto principal el pago de daños y perjuicios, probó su existencia y su derecho a ser indemnizado, pero no rindió pruebas que permitan precisar su importe, ni establecer las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, la condena al pago genérico de los mismos es procedente, reservándose la determinación de su cuantía para el procedimiento de ejecución de sentencia.". Pero, si no se demandaron en forma genérica, sino precisando su monto, los daños y perjuicios, no es, por tanto, aplicable la indicada tesis jurisprudencial."

--- Por último se cita la jurisprudencia clave I.3o.C. J/44, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1437, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, así como en el disco óptico IUS 2011, con el número de registro 170821, del tenor:

“CONDENA GENÉRICA O EN CANTIDAD LÍQUIDA, PARA DETERMINARLA EN RELACIÓN CON EL PAGO DE FRUTOS, INTERESES, DAÑOS O PERJUICIOS. EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LA NATURALEZA PRINCIPAL O ACCESORIA DE LA PRETENSIÓN RELATIVA Y A LA FORMA EN QUE SE DEMANDE. Sobre el particular pueden actualizarse y definirse jurídicamente las siguientes hipótesis: 1) cuando la pretensión de pago de frutos, intereses, daños o perjuicios, no es el objeto principal del juicio, pero en la demanda y durante el juicio se dan las bases para determinar

la procedencia de la prestación, se impone decretar una condena genérica para que en el periodo de ejecución de sentencia se cuantifique el monto exacto, resultando irrelevante que se formule en cantidad líquida o no, en virtud del carácter de prestación accesoria; 2) cuando se pretende el pago de frutos, intereses, daños o perjuicios como objeto principal del juicio, sin especificar su monto en la demanda natural, dada la indeterminación cuantitativa de la obligación relativa, resulta procedente la condena genérica si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su petición, por lo que en ejecución de sentencia puede cuantificarse válidamente el numerario exacto, siempre que se proporcionen las bases para tal efecto, y 3) cuando el actor solicita el pago de frutos, intereses, daños o perjuicios como objeto principal del juicio y, además, la formula en cantidad líquida, está obligado a demostrar durante el procedimiento, en primer lugar, el hecho en que descansa su pretensión y, también, que tiene derecho a recibir ese preciso numerario, pues en este supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que proceda la condena respectiva, sino que a su vez es menester que compruebe que le asiste derecho para exigir el pago de tal cantidad, por ende, estos aspectos relevantes no pueden determinarse en ejecución de sentencia, porque además de que es la prestación principal en el juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten que el actor tenga una nueva oportunidad para acreditar la suma exacta que tenía derecho a demandar, supuesto en el que no procede la condena genérica.”

--- De ahí que, si bien la actora justificó la causa eficiente de su derecho a demandar en la vía hipotecaria, la restitución de la cantidad mutuada y demás accesorios pactados en el contrato base, también lo es que no comprueba que ese derecho se traduzca de manera líquida en las veces el salario mínimo mensual o cantidad de dinero que reclama por concepto de suerte principal, toda vez que en autos no se advierte medio probatorio alguno que revista eficacia jurídica suficiente para determinar el valor pecuniario de aquella obligación a cargo del demandado.-----

--- En efecto, la actora reclamó una cantidad precisa por concepto de capital y afirmó que dicho importe correspondía al valor actualizado

(a la fecha de presentación de la demanda) de las 104.0000 veces de salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México); sin embargo, de autos se advierte que en momento alguno logró evidenciar dicha exigencia, ya que la documental consistente en el estado de adeudo certificado por el licenciado ***** , Subgerente de Área Jurídica de la Delegación Regional Tamaulipas del instituto demandante, que corre a fojas 16-23 del principal, carece de eficacia jurídica para corroborar el adeudo a cargo del acreditado por concepto de capital, toda vez que establece como saldo de capital en veces salario mínimo mensual una cantidad superior a la otorgada, sin que obre constancia o señalamiento alguno de que dicho crédito hubiere aumentado.-----

--- En efecto, este cuerpo colegiado estima que debe restarse toda eficacia probatoria a la certificación de adeudo exhibida por la parte actora, toda vez que dicho instrumento no refleja de manera clara el saldo resultante a cargo de la acreditada.-----

--- Lo anterior así se estima, porque en el contrato base de la acción se establece, entre otros aspectos, que ***** , recibió del ***** en calidad de mutuo la cantidad de \$104.0000 (ciento cuatro punto cero cero cero cero) veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal.-----

--- Por su parte la certificación de adeudo de uno de abril de dos mil dieciséis, suscrita por el Gerente del Área Jurídica de la Delegación Regional Tamaulipas del instituto demandante, indica que el monto del crédito otorgado a ***** , equivalía a 104.0000 VSM (veces salario mínimo mensual) y que la deuda actual por concepto de capital lo es de 120.7230 VSM (veces salario mínimo mensual),

que equivale a \$268,055.28 (Doscientos sesenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos 28/10 moneda nacional).-----

--- Pero en la tabla o desglose de movimientos en momento alguno se ilustra el motivo por el cual dicho rubro se vio incrementado, ya que por ejemplo, al treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reporta como transacción, dos traspasos de la subcuenta de vivienda al pago del crédito y un saldo por capital de 99.9783 (noventa y nueve punto nueve mil setecientos ochenta y tres) y 99.2218 (noventa y nueve punto dos mil doscientos dieciocho) veces el salario mínimo mensual.-----

--- Ahora bien, partiendo de la premisa de que para que un estado de cuenta se considere como tal y haga fe de los saldos resultantes a cargo de los acreditados, con independencia de que sean o no objetados por la parte contraria de quien los presenta como prueba en juicio, deben contener un desglose detallado de las causas y movimientos que originaron los saldos que reporta, toda vez que tal aspecto es necesario para acreditar la existencia del capital, intereses y demás accesorios generados, pues de lo contrario se limitaría la capacidad de defensa del deudor, ya que no podrían ser materia de la litis las bases con apoyo en las cuales se determinó la cuantificación de tales conceptos; por consiguiente, si del estado de cuenta exhibido por el instituto demandante, no se advierte el desglose detallado de las causas y movimientos que originaron la cantidad señalada como capital, éste no puede merecer eficacia probatoria.-----

--- De ahí que se considere que el cálculo contenido en dicha certificación deviene insuficiente para generar convicción respecto a la exigibilidad, liquidez y certeza del adeudo atribuido al demandado, toda vez que no se ilustra el origen de las cantidades que arroja

dicha certificación por concepto de capital, tanto en veces salario mínimo como en pesos; puesto que el estado de cuenta exhibido por la actora, en la tabla o desglose de movimientos, en momento alguno ilustra el motivo por el cual se vio incrementado el concepto de capital, por lo que dicho documento no merece eficacia para los fines pretendidos por su oferente.-----

--- Y es que, se reitera, la actora dirigió su reclamo por concepto de capital, en una precisa cantidad de veces de salario mínimo mensual, señalando su equivalente en pesos a la fecha de presentación de la demanda; y con tal propósito exhibió el estado de cuenta certificado de que se trata, tanto así que en la prestación B. hizo remisión expresa al citado documento.-----

--- No es óbice a lo razonado, el que el demandado no haya objetado la certificación de adeudos exhibida por el instituto demandante, a partir de lo cual se puede pensar que el citado documento surtió efectos como si fuese reconocido de forma expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 333 y 398 del Código Adjetivo Civil, debiendo concederle el juzgador valor probatorio; y es que, al respecto es menester distinguir entre el valor y la eficacia probatoria de un medio de prueba, siendo el primero de ellos, el que se otorga en virtud de sus características de elaboración, como se prevé en el Capítulo XI del Código Adjetivo Civil, en cambio, para que se otorgue la eficacia probatoria, dicha probanza debe ser idónea para acreditar lo pretendido por su oferente.-----

--- En esta virtud, la falta de objeción sólo puede producirle a un documento valor probatorio en relación con su continente, más no puede generarle un alcance probatorio del que carezca, por tanto si el documento merece valor probatorio, lo cierto es, que la misma

carece de eficacia jurídica para acreditar los saldos resultantes por capital a cargo del acreditado, toda vez que establece como saldo de capital en veces salario mínimo mensual una cantidad superior a la otorgada, sin que obre constancia o señalamiento alguno de que dicho crédito hubiere aumentado; por tal razón, debe concluirse, que cuando un medio de convicción tiene valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido.-----

--- Se estima aplicable al caso, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación XIV, Octava Época, octubre de 1994, Tesis: I. 3o. A. 145 K, página 385, que reza:

“VALOR Y ALCANCE PROBATORIOS. DISTINCIÓN CONCEPTUAL. AUNQUE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN TENGA PLENO VALOR PROBATORIO, NO NECESARIAMENTE TENDRÁ EL ALCANCE DE ACREDITAR LOS HECHOS QUE A TRAVÉS SUYO PRETENDA DEMOSTRAR EL INTERESADO.- La valoración de los medios de prueba es una actividad que el juzgador puede realizar a partir de cuando menos dos enfoques; uno relacionado con el continente y el otro con el contenido, el primero de los cuales tiene como propósito definir qué autoridad formal tiene el respectivo elemento de juicio para la demostración de hechos en general. Esto se logrará al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues la ley asigna a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies (documentos públicos, privados, testimoniales, dictámenes periciales, etcétera. Código Federal de Procedimientos Civiles, Libro Primero, Título Cuarto), derivada de aspectos adjetivos de aquéllos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, su autor y en general lo atinente a su génesis. El segundo de los enfoques en alusión está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza, como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. A través de aquél el juzgador buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se

conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio. De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda, para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; a diferencia del alcance probatorio, que únicamente se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados. Ante la referida distinción conceptual, debe decirse que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate.”

--- En ese sentido, del análisis realizado previamente se concluye, que no se cuenta con las cantidades líquidas reales adeudadas por la acreditada a la fecha de presentación de la demanda, en atención a que el estado de cuenta exhibido con tal propósito por el actor, carece de eficacia probatoria para acreditar el saldo resultante a cargo del acreditado, toda vez que establece como saldo de capital en veces salario mínimo mensual una cantidad superior a la otorgada, sin que obre constancia o señalamiento alguno de que dicho crédito hubiere aumentado, por lo que no está en condiciones de emitir condena en cantidad líquida por concepto de capital.-----

--- Luego, si del expediente de primera instancia no se advierte prueba fehaciente que acredite el derecho de la actora a obtener el importe reclamado por concepto de capital, ya que el estado de cuenta exhibido con tal propósito deviene ineficaz para ello, es evidente que no existen bases ciertas para fincar condena de una determinada cantidad de veces salario mínimo o pesos por concepto de capital, razón por la que procede absolver al demandado.-----

--- Por lo que esta sala colegiada estima con plenitud de jurisdicción, que en la especie, no se acreditaron suficientemente los hechos de la

demanda, lo que impone resolver improcedente la acción ejercitada por el ***** por conducto de su apoderada ***** y continuado por ***** , con el mismo carácter, en contra de ***** , habida cuenta de que, como se anticipó, la actora solicitó por concepto de capital, el pago preciso de una cantidad en dinero o veces el salario mínimo mensual vigente para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, por tal motivo estaba procesalmente obligada a aportar las pruebas tendentes a demostrar el derecho en que descansa su pretensión y que ese derecho se traduce de manera líquida a las veces de salario mínimo mensual o dinero que reclama, aspectos relevantes que no pueden determinarse en ejecución de sentencia, ya que además de que la prestación de mérito es objeto principal del juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permite que el actor principal tenga una nueva oportunidad para acreditar la manera en que su derecho se traduce en un monto líquido en dinero.-----

--- Atentos a las anteriores consideraciones, con fundamento en el artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles, se revoca la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, Tamaulipas y ahora, con plenitud de jurisdicción, se resuelve que la parte actora no acreditó los hechos de su demanda; que no ha procedido el juicio hipotecario promovido por el ***** , por conducto de su apoderada ***** y continuado por ***** , con el mismo carácter, en

contra de *****; que se absuelve al demandado de las prestaciones

reclamadas en su contra por el Instituto accionante.-----

--- Sin que proceda imponer condena en costas por la primera instancia a la actora, toda vez que el demandado compareció a dicha instancia hasta después de pronunciada la sentencia.-----

--- Por último, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 139, segundo supuesto, en relación con el diverso 130 del Código de Procedimientos Civiles, se condena a la parte actora a pagar al demandado apelante los gastos y costas de la segunda instancia, toda vez que promovió una acción de condena y obtuvo fallo adverso ante esta alzada.-----

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado además en los artículos 105, Fracción III, 112, 113, 118, 926, 949 del Código de Procedimientos Civiles, se resuelve:-----

--- **PRIMERO.-** Son fundados, en lo esencial, los agravios vertidos por el demandado ***** , en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Juez Sexto de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, Tamaulipas.-----

--- **SEGUNDO.-** Se revoca la sentencia apelada a que se hizo referencia en el punto resolutive anterior y ahora, con plenitud de jurisdicción, se resuelve:

“**PRIMERO.-** La parte actora no acreditó los hechos de su demanda.”

“**SEGUNDO.-** No ha procedido el juicio hipotecario promovido por el ***** , por conducto de su apoderada ***** y continuado por ***** , con el mismo carácter, en contra de ***** .”

“**TERCERO.-** Se absuelve al demandado de las prestaciones reclamadas en su contra por el instituto accionante.”

“**CUARTO.-** No se hace especial condena en costas por la primera instancia.”

“**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-** Así lo resolvió y firma...”.

--- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-** Con testimonio de la presente resolución devuélvase el expediente al Juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.-----

--- Así, lo resolvió esta Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por unanimidad de votos de los Magistrados Egidio Torre Gómez, Alejandro Alberto Salinas Martínez y Jesús Miguel Gracia Riestra, siendo Presidente el primero y Ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con la Licenciada Sandra Araceli Elías Domínguez, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.-----

Lic. Egidio Torre Gómez.
Magistrado Presidente.

Lic. Alejandro Alberto Salinas Martínez.
Magistrado Ponente.

Lic. Jesús Miguel Gracia Riestra.
Magistrado.

Lic. Sandra Araceli Elías Domínguez.
Secretaria de Acuerdos.

--- Enseguida se publica en Lista de Acuerdos._ CONSTE.
L'ETG/L'AASM/JMGR/L'SAED/L'RFPA/mmct'

El Licenciado Rubén Francisco Pérez Avalos, Secretario Proyectista, adscrito a la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución 471 (cuatrocientos setenta y uno) dictada el Jueves, 13 (trece) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho) por los Magistrados Egidio Torre Gómez, Alejandro Alberto Salinas Martínez y Jesús Miguel Gracia Riestra, constante de 27 (veintisiete) fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: El nombre de las partes, el de sus representantes legales y el de terceros; los datos del título base de la acción, el nombre del fedatario ante quien se otorgó, su inscripción en registro, así como la ubicación del bien gravado. Información que se considera legalmente como confidencial y sensible, por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 13 de abril de 2018.